DERECHO SOCIAL Y NOCION UNIVERSAL DEL DERECHO

Por el doctor Abelardo ROJAS ROLDÁN
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

¿Qué es el derecho social? No es fácil responder categóricamente a esta pregunta. Un buen número de sociólogos y muy pocos juristas se han preocupado por esta perspectiva del derecho. Se ha dicho que es el derecho del porvenir y con razón, pero no se dice satisfactoriamente por qué. Parece que es instrumento de una tendencia, dentro de la evolución del derecho, pero sus peculiaridades no se descubren. La confusión aumenta cuando se llega a la conclusión de que todo derecho es “social”, en el mismo sentido que todo círculo es redondo. Benvenuto Donati expresó con toda propiedad, que los términos de derecho y sociedad son recíprocos.

Son muchas las razones por las que no se ha podido contestar esa pregunta de manera tajante, pero desde luego una de ellas es que aún no logramos acuerdo para definir el derecho como concepto general. No existe todavía la noción universal del derecho que a todos satisfaga; tarea que ha sido encomendada a los filósofos juristas.

Según el testimonio de Bergbohm¹ “los juristas ilustrados se ven en aprieto si se les pide una definición del derecho”; y si esto pasa con los especialistas, ¿Qué no pasará con los legos en la materia? Cuando esta pregunta se hace a juristas, litigantes, profesores y estudiantes de la materia o bien a personas en general, la respuesta más repetida, en el noventa y cinco por ciento o más de los casos, es que el derecho es “un conjunto de normas. . .” Algunos agregan que dichas normas son imperativo atributivas; otros que son coercibles. . . que regulan conducta humana de cierto modo. . . que se pueden exigir e imponer aún por la fuerza institucionalizada, etc. Es verdad que de alguna manera, el derecho implica un conjunto de normas, pero igualmente forman conjunto las normas religiosas, las de la moralidad o las que expresan los convencionalismos sociales, por no referir otros órdenes normativos menores. Así que la primera o única parte de esas definiciones no nos

¹ Citado por Víctor CATHREIN: *Filosofía del Derecho*, Instituto Editorial Reus, S. A., séptima edición, Madrid, 1958, pág. 72.

dice nada concreto y exclusivo del derecho en su noción universal. Pero más que eso, porque es cierto que las normas que expresan lo que el derecho es, son coercibles, de aplicación general e inexorable, eventualmente se imponen de manera coactiva, son bilaterales, etc. pero resulta que esto es correcto afirmarlo sólo colocándonos en uno de los planos de lo jurídico. Otros juristas que se colocan en otro nivel, llegan a conclusiones muy diversas, ¿entonces qué es lo que pasa? Parece que lo que sucede es que siendo el objeto derecho, observable desde diversos planos o niveles, las definiciones que se logran resultan contradictorias o, en el mejor de los casos, complementarias y según esto "todo es según el color del cristal con que se mira".

En una clasificación simplista de las definiciones, existen aquellas en las que se han empeñado los filósofos juristas, para elaborar una noción universal, tan universal que la misma comprenda lo que el derecho fue, es y será. Por otra parte están las definiciones de los juristas dogmáticos o científicos, como podría llamárseles. Ellos dan también su punto de vista, de acuerdo con sus observaciones concretas en un determinado sistema jurídico positivo, pero con pretensiones de universalidad. También es necesario considerar las definiciones de los sociólogos juristas, que ven el derecho como un fenómeno social, como conducta y actuación real. Todos definen el mismo objeto, pero desde perspectivas diversas. Tengamos en cuenta que aún dentro de cada postura existen contradicciones y escasas coincidencias. Entonces, al comparar la infinidad de definiciones que se proponen, el caos es absoluto y el resultado es que no nos satisface ninguna de las nociones, porque no resisten la prueba de exactitud, justificación y permanencia en el tiempo y en el espacio.

Pero la lucha por encontrar la noción universal del derecho se complica mucho más, porque no pocas de esas definiciones están contaminadas de prejuicios, de inquietudes políticas, religiosas, de poder y fuerza o ideológicas y por ello la preocupación de Hans Kelsen (1881-1973) de elaborar una teoría pura en la que el derecho no esté impregnado de elementos psicológicos, políticos y otras materias ajenas, que lo hacen aparecer como no es.

Todos estamos de acuerdo en que definir no es nada fácil. Definir significa desarrollar el concepto que se tiene de las cosas. Primero son los conceptos y después su definición. Esta debe responder a la realidad objetiva de lo descrito. Definir implica adquirir la responsabilidad de concentrar los datos y elementos más esenciales de lo definido, sin soslayar alguno que pudiera ser elemental y básico. El problema semántico del uso adecuado de las palabras aumenta todavía más

las discrepancias. También padecemos la inexacta traducción de libros de autores extranjeros, que no nos transmiten el genuino pensamiento del definidor. Ante esta árdua labor definitoria, algunos juristas de diversas partes del mundo, han proclamado la indefinición del derecho. Esta postura no será nunca la del filósofo jurista serio, porque éste, según se ha dicho, "siempre seguirá apuntando al blanco, aunque no le pegue". La filosofía, indica Karl Jaspers² "quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. . . La búsqueda constante de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la filosofía".

Pero todavía la cuestión se complica más, porque no sólo se han propuesto definiciones que tratan de describir el derecho mismo, aunque desde diversos planos, que normalmente tales nociones pueden encontrar congruencia si se está consciente de que definen el mismo objeto desde diverso ángulo; sino que también hay quienes, en el afán de describir el derecho, definen otros objetos distintos que eventualmente alguna conexión pueden tener con el objeto principal. Estos son los juristas, según expresaba en clase el maestro Oscar Morineau, que "definen el ojal por el botón"; es decir, algo que está cerca del derecho, pero que no es el derecho mismo.

El otro obstáculo que ha existido para definir, si salimos en defensa de los juristas que se lo han propuesto, es que el objeto derecho, al menos desde uno de los planos en los que es observable, cambia, se transforma, evoluciona. . . hoy es una cosa y mañana otra. Esto sucede desde la perspectiva de los diversos sistemas jurídicos que existen en el mundo. Son parecidos, pero no iguales y está históricamente probado que se modifican y cambian. Evoluciona el hombre, evoluciona la cultura y todos los elementos que del propio hombre se desprenden; cambian las sociedades; las interrelaciones de individuos, grupos, sectores, sociedades, corporaciones y gobiernos representativos de los Estados, están en un constante movimiento dialéctico. No son las mismas, estas interrelaciones, en cada época y en cada lugar. Esto quiere decir que quienes pretenden definir el derecho, en su aspecto de sistema jurídico, el objeto a definir se les mueve, porque hoy es de un modo y mañana de otro. La Historia registra testimonios sobre los constantes cambios en los grupos que detentan el poder público, que son los que elaboran las leyes y así mismo de las grandes transformaciones sociales y movimientos en todos los pueblos del mundo, que después se reflejan en los diversos sistemas jurídicos, para estar actualizados y responder a

² *La Filosofía*, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1979, pág. 11.

las exigencias del momento. Así que si el objeto derecho (noción universal) puede decirse que está fijo, y no podemos definirlo satisfactoriamente, mucho menos si se mueve y cambia en una de sus facetas.

Volviendo a la idea expresada con anterioridad, acerca de los diversos planos o niveles de lo jurídico, resumiré diciendo que al derecho, básicamente, se le puede observar desde estos tres planos, que no son excluyentes u opuestos, sino en todo caso complementarios:

A) Al primero lo llamaremos plano conceptual o bien filosófico. En este nivel es necesario encontrar una noción universal del derecho. Una noción que sea valedera para descubrir lo que de común tienen todos los sistemas jurídicos del mundo. Una noción que contenga y de la que se desprendan los llamados conceptos jurídicos fundamentales, que con el carácter de categorías apriorísticas, se encuentran presentes en todo derecho posible. Según este plano el derecho resulta ser un orden normativo de ciertas características, que no es el único por el que las personas rigen su conducta. Un orden para una regulación —exigible— de la conducta humana, en el sentido de ciertos valores sociales. Por nuestra parte hemos propuesto una noción universal regida por los principios de generalidad y abstracción, según la cual el derecho es un orden que se expresa mediante normas, que constituyen un sistema unitario, con una forma invariable; que regulan la conducta humana de manera general e inexorable, bilateral, externa y coercible, cuyas normas son creadas y eventualmente impuestas por órganos de poder institucionalizado y que hacen referencia a contenidos variables, facultando a un sujeto pretensor, para exigir de otro sujeto obligado, conductas que se consideran obligatorias para lograr fines o propósitos colectivos, con cuyo cumplimiento se pugna por realizar valores sociales (como la justicia, la paz, la solidaridad, la seguridad social, etc.).

B) Otro plano al que convencionalmente llamaremos de la sistemática jurídica o bien normativo. Aquí el derecho se presenta como algo menos general y abstracto, sino más bien concreto e identificable en cierta época y en cierto lugar del planeta Tierra. Cada Estado, quiero decir cada Estado de derecho, cuenta con un sistema de normas jurídicas objetivas, que regulan la actividad de gobernados y gobernantes, teniendo como base una constitución general de la que emanan las leyes, los decretos, los reglamentos y toda disposición legal, hasta llegar a las normas jurídicas individualizadas. En este plano si cabe decir, con propiedad, lo que expresa la gran mayoría de la gente, que el derecho “es un conjunto de normas” jurídicas —claro está— que regulan la conducta de una población —de gobernados y gobernantes— y que

tales normas presentan características muy especiales, que las diferencian de otras clases de normas, como las morales, las religiosas o los convencionalismos sociales.

Esta noción de derecho, que parte de la observación de los sistemas jurídicos, es tarea de los científicos y dogmáticos del derecho, dentro de la Teoría General del Derecho y no de la Filosofía, como corresponde al plano anterior. Tal Teoría General, como lo indica Félix Somló, es una disciplina nomográfica, ya que se limita a exponer y sistematizar el contenido de prescripciones ya formuladas. De la noción universal del derecho que corresponde al primer plano, debe derivar la indudable naturaleza sistemática del derecho. Aquí el derecho con sus normas sistematizadas es, como lo expresó Luis Recaséns Siches, vida humana, pero objetivada. A este segundo plano que comentamos pudiéramos denominarlo también como el plano de la regulación de la conducta o bien plano del derecho objetivo.

C) Al tercer plano lo llamaremos de la realidad jurídica, del orden jurídico o bien del derecho vivo. En este plano hay que analizar al derecho como fenómeno sociológico. Este es el plano de los hechos, de las conductas y las realizaciones. Esta es la dimensión fáctica del derecho, en la que se afirma o se niega su eficacia o ineficacia reales; en la que, en la práctica, se aplica y opera. A este plano también lo podríamos denominar plano de la conducta jurídicamente regulada.

Si en el plano B está implicado el derecho como sistema y en el C está implicado como orden, cabe hacer una pulcra distinción entre sistema normativo y orden jurídico, como válidamente lo hace el Dr. García Máynez en su *Filosofía del Derecho*³ indicando que el primero "es sólo una parte o elemento del orden jurídico, a saber, el conjunto de los preceptos integrantes de la regulación bilateral, externa y coercible del comportamiento" y el segundo, el orden jurídico, "sólo puede existir cuando los destinatarios de su sistema normativo ajustan normalmente su conducta a las prescripciones en vigor. El sistema jurídico viene a ser el conjunto ordenado, jerarquizado y unitario de normas objetivas y el orden es aquello que resulta de la aplicación de tales normas. "La eficacia de un sistema es un elemento estructural de todo orden jurídico".

La confusión entre estos dos conceptos —sistema y orden— es común en un número muy considerable de juristas. Por sólo mencionar algunos al azahar citaremos a Hans Kelsen, Bernhard Rehfeldt, Norberto Bobbio —en su Teoría del Ordenamiento Jurídico— Kantorow-

³ *Filosofía del Derecho*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1a. edición, 1974, págs. 183 y sigs.

wicz, Helmut Coing, Nawiasky y Larenz, entre otros, quienes designan como orden jurídico a lo que en rigor es sistema normativo o sistema jurídico.

En los tres planos indicados está lo jurídico, pero visto desde distinto ángulo. Al final resulta que están en íntima relación de complementación: a) Noción universal del derecho, en la que se expresa lo que el derecho es de manera general sin límites de tiempo y espacio; b) Luego las normas jurídicas organizadas en sistema unitario, que rigen la actividad humana, de cierto modo, dentro de cada Estado de Derecho y c) La manera como se presenta la normatividad jurídica cuando se hace realidad, cuando el derecho vive.

Si quisiera seguir justificando por qué no nos ponemos de acuerdo para definir integralmente el objeto derecho, en una noción universal, también agregaría que no hay acuerdo acerca del método para conocerlo. No se define el camino para llegar a él. Así que estamos frente a un problema también metodológico y epistemológico.

Creo que todavía hay otra causa del desacuerdo en la definición del derecho. Al parecer nadie niega su dimensión normativa, pero también otros órdenes tienen esa misma dimensión. Sin embargo, también hay algún acuerdo acerca de que las diversas normas que expresan a los distintos órdenes normativos, presentan características distintivas y específicas, si bien todas son normas que tratan de alcanzar valores, como rasgo común. No obstante, al hacer el examen de las normas que actualizan al derecho, a unos juristas — a los que se ha llamado formalistas — les ha parecido que lo más relevante, si no es que lo único válido, es conocerlas en su forma, porque se dice que ésta es siempre invariable. Otros juristas expresan que lo importante en las normas es su CONTENIDO, que por su propia naturaleza es histórico y variable. Los contenidos — indican — son la materia de que tratan las normas y en ella se prescribe la manera justa o al menos legal de regular las conductas. A esta pretensión contestan otros juristas, como Rudolf von Ihering (1818-1895) que lo relevante en las normas jurídicas es el fin o sea los propósitos que se persiguen, que son de carácter sui géneris en el derecho. “En el fin — expresó — se haya contenido el hombre, la humanidad, la Historia”. Esta consecución de los fines sociales en la vida pública, constituye la dimensión teleológica de las normas jurídicas. La clase de fines que persiguen las distingue de otras normas. Pero todavía hay una cuarta postura que es la de los juristas que sostienen que más importante que la forma, los contenidos o los fines, es la cuestión valorativa o dimensión axiológica de las normas que nos ocupan. Las normas de derecho se distinguen, en esta postura, de

otras y adquieren plena eficacia, en función de los valores colectivos que tratan de realizar, como la paz, la justicia, la seguridad o la solidaridad sociales, que todo ser humano requiere para desenvolverse y evolucionar en lo social. Dentro de esta postura valorativa destacan las teorías iusnaturalistas, ya sea las que se basan en la naturaleza divina o en la naturaleza humana.

Ante tal diversidad de posturas, que destacan la primacía de alguna de esas dimensiones, para conocer y describir las normas jurídicas, en el X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, celebrado en la capital de la República Mexicana, en 1981⁴ propuse la teoría de la tetradimensionalidad de las normas jurídicas, estimando que las cuatro dimensiones: forma, contenidos, fines y valores, son todas por igual relevantes, que en un momento dado se fusionan y no puede decirse que una sea de mayor importancia que la otra. A las normas jurídicas hay que identificarlas, conocerlas y describirlas a través de esas cuatro perspectivas. Ahora bien, si el derecho se actualiza y expresa a través de normas jurídicas, esto quiere decir que la tetradimensionalidad de tales normas debe formar parte de una noción universal del derecho y así lo expresamos al proponer nuestra definición en el mismo Congreso a que antes aludí, si bien es cierto que ya antes había expresado mi inquietud de definir de manera universal el derecho, en un estudio de recopilación y glosa llevado a cabo por el Dr. Luis Recaséns Siches, con el título de *La Filosofía del Derecho en México durante el Siglo XX*.⁵ Estas cuatro dimensiones que describen a las normas jurídicas podrían concretarse así:

FORMA INVARIABLE. La norma jurídica siempre reviste una misma estructura formal y está encuadrada dentro de la fórmula silogística: Si A es, debe ser B; si B no es, debe ser C. En las dos partes que constituyen esta estructura formal encontramos una hipótesis o supuesto normativo, un hecho jurídico y las consecuencias, que en la primera parte de la fórmula se traducen en el nacimiento de derechos subjetivos y deberes jurídicos y, en la segunda, en una sanción prevista para el caso de incumplimiento de la conducta debida.

CONTENIDOS VARIABLES. El derecho en su versión de sistema jurídico, se halla en evolución constante, dependiendo siempre de la multiplicidad de circunstancias históricas, que provocan la aparición de

⁴ *Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social* (I.V.R.), volumen X, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1984, págs. 245-250. La tetradimensionalidad de las normas jurídicas, la definición del derecho y otras implicaciones.

⁵ Publicado en *LXXV Años de la Evolución Jurídica en el Mundo*, vol. IV, UNAM, México, 1979, pág. 78.

nuevas necesidades. La variabilidad en el contenido de las normas jurídicas está relacionada también con la diversidad de materias que regulan y, claro está, que lo que una norma jurídica contenga, está en función de los fines o propósitos que se persiguen y los valores sociales que se buscan.

FINES COLECTIVOS. Los sistemas jurídicos deben tender a crear las condiciones indispensables y necesarias para la consecución del bienestar y la armonía generales. Por lo tanto, las normas jurídicas no persiguen propósitos y objetivos personales; por el contrario, pretenden el logro de metas colectivas; por ejemplo, la igualdad jurídica del hombre y la mujer; la regulación adecuada de la actividad educativa en beneficio general, etc. En este sentido, se dice que la norma jurídica tiene una función instrumental, que sirve para alcanzar ciertos propósitos.

VALORES SOCIALES. El logro o realización de los fines colectivos implica necesariamente la práctica cotidiana de ciertos valores en la comunidad, que pertenecen a la esencia misma de lo humano. Es decir, se requiere que la colectividad realice valores como la paz, la justicia, la solidaridad, etc., sin los cuales resultaría imposible la satisfacción de las pretensiones colectivas para el cabal desarrollo y evolución del hombre.

Resumiendo nuestro pensamiento hasta aquí y no perdiendo de vista que tratamos de descubrir las peculiaridades del derecho social, hemos dedicado este amplio espacio para lograr primero algún acuerdo acerca de qué es el derecho en su noción universal o bien al menos para señalar su problemática y su íntima relación entre ambos conceptos. Decíamos que, después de todo, el llamado "social", no es otro objeto distinto del derecho mismo, sino en todo caso una modalidad o proyección especial, que obedece a una tendencia reguladora específica; pero antes de proceder quisimos dejar firme, como antecedentes, que estimamos que el derecho debe ser cabalmente conocido y descrito desde cualesquiera de los tres planos o niveles a que nos hemos referido, sin que ninguno sea excluyente del otro, sino entendiéndolos en su unidad indisoluble.

Por otra parte, también hemos afirmado la conveniencia de conocer las normas jurídicas a través de las cuatro dimensiones descritas, relativas a la forma, contenidos, fines y valores.

Estas distinciones que apuntamos como antecedentes, son absolutamente relevantes al momento de realizar un estudio integral y relacional del derecho, para entenderlo cabalmente. Es necesario conectar un concepto jurídico con el otro, ante el reconocimiento de que el

derecho implica una urdimbre de relaciones, no sólo interpersonales, sino entre los componentes de toda norma jurídica; entre normas de tal especie; entre el sistema jurídico y los destinatarios de sus prescripciones; entre los diversos órganos de gobierno; entre gobernados y gobernantes, etc. La labor del jurista es descubrir todas esas relaciones, que le servirán para conocer y describir el todo en el derecho o alguna de sus partes.

Al analizar cualquier institución, concepto, situación o elemento, que merezcan el calificativo de jurídicos, debemos preguntarnos en que plano o nivel de los examinados se encuentra y con ello evitaremos confusiones y distorsiones. Por ejemplo, las tradicionales fuentes del derecho, realmente no lo son del derecho (noción universal), sino en todo caso son fuentes del sistema jurídico; el derecho social al querer situarlo, resulta que es más bien legislación social o normas de derecho social; también el derecho natural al pretender situarlo en alguno de los planos, resulta que no es tal derecho, porque más bien esta postura se refiere a un conjunto de principios valorativos, que deben ser logrados mediante el derecho, como instrumento realizador de tales valores. Al querer situarlo se observa que este derecho natural no tiene una existencia y realidad concretas.

El análisis de la forma, contenidos, fines y valores en las normas jurídicas coadyuva al conocimiento de tales normas y esta labor es especialmente relevante en la interpretación de sus prescripciones. Para no hacer una fría interpretación gramatical y literal o simplemente intuitiva, que seguramente conducen a injusticias, es pertinente examinar los contenidos de tales normas, para indagar en ellos el fin o propósito que se persigue con una cierta regulación de conducta y cuales son los valores sociales que quiso preservar el legislador.⁶

En fin, ya nos asomamos a la problemática que existe para definir de manera universal al derecho. Estos antecedentes nos servirán para saber, por anticipado, que los problemas no serán menores para encontrar la naturaleza y peculiaridades del llamado derecho social. Este derecho, decíamos, no es algo diferente a lo que por derecho, en general, se entienda. Sin embargo si es necesario indagar qué se ha querido expresar con lo de "social" y concluir si es representativo de una trayectoria especial que conlleva un cambio de mentalidad; si es una proyección futurista y evolutiva; si es, como se ha dicho, popu-

⁶ Esta idea la empecé a desarrollar en el ensayo "Sistemas de Interpretación del Derecho"; "El Arte de la Interpretación Jurídica". *Revista de la Facultad de Derecho, UNAM*, núms. 105-106, enero-junio de 1977, págs. 325-339.

lar y hasta revolucionario; todo ello de acuerdo a la experiencia histórica, que ya registra las peculiaridades que investigamos.

De una manera panorámica veamos lo que se ha investigado sobre el derecho social.

Georges Gurvitch (1894-1965) sociólogo moscovita, profesor de la Universidad de Praga, siguiendo de algún modo el camino de Maurice Hauriou y León Duguit elaboró una teoría basada en las ideas del pluralismo jurídico y del derecho social. El derecho —indicó— no sólo es limitación y castigo, sino ayuda y superación. En su versión de social, se le denomina así porque “socializa”, porque nace de lo más profundo de la “sociedad”. La función del derecho social —expresó— es la de integrar a los grupos sociales. Tal derecho, en su forma pura, se origina espontáneamente en las comunidades subyacentes de todo grupo social. Desde su tesis doctoral presentada en la Universidad de París observó una característica destacada de este derecho, cuando expresó que es un derecho de comunión y de integración; es el derecho de “nosotros”, no “mi” derecho. Con estas aseveraciones claramente se aparta del individualismo. Inspirándonos en el pensamiento de Gurvitch, aseveramos que los hombres tienen necesidad de vivir en comunión y de integrarse a los diversos grupos que constituyen la sociedad. De este modo, los destinatarios de las normas de derecho son los propios grupos y no los individuos. Los derechos y obligaciones de los que son destinatarios los diversos grupos, repercuten en cada individuo integrante de tales grupos.

Su obra: *L’Idée du droit social*, Editorial Sirey, París, 1932.

No podemos dejar de citar a Gustavo Radbruch, profesor de la Universidad de Heildelberg, uno de los inspiradores socializantes de la constitución alemana de 1919. El derecho social⁷ escribió Radbruch, es una nueva forma estilística del derecho. Es el resultado de una nueva concepción del hombre por el derecho, de una nueva imagen del hombre ante el legislador. La concepción jurídica individualista se orienta hacia un tipo de hombre egoísta y calculador, idealmente aislado y a quien se supone, en abstracto, igual a los demás y viviendo al margen de todo vínculo social. Ahora el hombre colectivo es la base del derecho social. La idea central de este derecho no es la idea de la igualdad de las personas, sino la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen. . . El campo del derecho social aparece delimitado por aquellos derechos que aparecen a la cabeza de todos los que se refieren a la colectividad: los derechos humanos, cuya esencia se cifra

⁷ *Introducción a la Filosofía del Derecho*, Fondo de Cultura Económica, México, 1951, págs. 157-165. *Introducción a la Ciencia del Derecho*, Madrid, 1930.

precisamente en garantizar la libertad exterior del hombre, haciendo con ello posible la libertad interior de su conducta moral.

Gurvitch y Radbruch han dado los mejores aportes para el entendimiento y comprensión del derecho social, así como no han faltado los escépticos y los que le conceden un alcance muy limitado.

Geny consideró que el derecho social es una especie del derecho natural, un ideal, un principio moral de crítica del derecho positivo y no le considera ninguna estructura jurídica precisa.

En la actualidad son más los juristas que no conceden gran porvenir a este derecho que estudiamos y se han contagiado de la idea de restringir su campo de acción.

El maestro Francisco González Díaz Lombardo vio en el derecho social un instrumento para la obtención del mayor bienestar social de las personas y los pueblos, mediante la justicia social.⁸ El derecho del futuro tendrá que ser un derecho social de integración —siguiendo en esta idea a Gurvitch— con un contenido moral altruista y mejor todavía, altruista y trascendente. . . Sin embargo —agrega— de momento debo mostrarme escéptico a su inmediato futuro. . . deberá haber un medio ambiente, tanto individual, como colectivo de moralidad, que partiendo de la observación ética personal, trascienda a lo social. El derecho social es una ordenación de la sociedad en función de una integración dinámica.

La síntesis más acertada que podemos hacer consiste en afirmar que el derecho social —opina Enrique Álvarez del Castillo— es un nuevo orden jurídico correspondiente a las necesidades de la sociedad industrial contemporánea. Esta idea no debemos perderla cuando confrontamos la naturaleza actual del derecho y del derecho social con las viejas tradiciones que pretenden todavía definir al derecho con el uso de conceptos ideales, hipotéticos; fórmulas conservadas, como momias egipcias, por el jusnaturalismo.⁹

Sergio García Ramírez¹⁰ indica que el derecho social “dicho de una vez y por vía general, es el sistema jurídico popular de los débiles. De tal suerte, es mucho más que sólo el derecho del trabajo, pero mucho menos, también, que el orden jurídico total. Además se presenta como

⁸ *El Derecho Social y la Seguridad Social Integral*, Textos Universitarios, UNAM, México, 1978, pág. 51. También *Proyecciones y Ensayos Sociopolíticos de México*, Ediciones Botas, México, 1963, págs. 155 y 162-164.

⁹ *El Derecho Social y los Derechos Sociales Mexicanos*, Editorial de Miguel Ángel Porrúa, México, D. F., 1982.

¹⁰ “Lo Social en los Sistemas Jurídicos Constitucional e Internacional Contemporáneos”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, año 1, núm. 1, enero-abril 1968, pág. 122. También “El Derecho Social”, *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, tomo XV, págs. 633 y sigs.

sistema jurídico de creación autónoma por y para ciertas colectividades, grupos o instituciones (a menudo profesionales), y ya no por ni para el Estado o el individuo”.

Para Eduardo F. Stafforini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, “es el conjunto de principios y normas pertenecientes a las distintas materias jurídicas que, inspiradas en una nueva concepción de la justicia y del hombre, tienen por fin proteger y dignificar a los individuos social y económicamente débiles”.¹¹ “No debemos dudar. . . de la singular trascendencia del derecho social, como expresión jurídica de la transformación de la sociedad contemporánea”. “Este derecho rectifica las duras concepciones del derecho tradicional”.

Dentro de la misma postura que antecede podemos considerar al maestro Lucio Mendieta y Núñez y a Héctor Fix Zamudio. El primero indica de

es el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo.

Por su parte, el segundo expresa que

es un conjunto de normas jurídicas nacidas con independencia de las ya existentes y en situación equidistante respecto de la división tradicional del derecho público y del derecho privado, como un tercer sector, una tercera dimensión, que debe configurarse como un derecho de grupo, proteccionista de los núcleos más débiles de la sociedad, un derecho de integración, equilibrador y comunitario.¹²

Otros juristas como Alberto Trueba Urbina, Andrés Serra Rojas, Luis Recaséns Siches, Ripert, Ernesto Krotoschin, Carlos García Oviedo, León Martín Granizo, Mariano González Rothvoss, por sólo citar algunos, todos ellos identifican al derecho social con el derecho del trabajo. “. . . Es el conjunto de principios jurídicos que regulan las relaciones laborales, que son tutelados por el Estado”¹³ (Serra Rojas);

¹¹ STAFFORINI, Eduardo R., *Derecho Procesal Social*, Editorial Tipográfica, Editora Argentina, Buenos Aires, 1955, pág. 26. También Panorama Actual del “Derecho Social en Argentina”, *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, tomo XV, núm. 58, abril-junio de 1965, págs. 447-458.

¹² MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio, *El Derecho Social*, Segunda edición, Editorial Porrúa, S. A., 1967, págs. 66-67. Fix Zamudio, Héctor, *Estudios Procesales en Memoria de Carlos Viada*, Madrid, 1965, pág. 507. Citado por Alberto TRUEBA URBINA en *Nuevo Derecho del Trabajo*, Editorial Porrúa, S. A., 3a. edición, México, 1975, pág. 152.

¹³ SERRA ROJAS, Andrés; *Ciencias Políticas*, tomo II, Instituto Mexicano de Cultura, México, 1971, pág. 614.

“Al margen de la fuente productora de todo derecho, la sociedad, por lo que no hay derecho que no sea social, se admite esta clasificación para connotar un derecho específico de la clase laboral”¹⁴ (Recaséns Siches); “Es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles”¹⁵ (Trueba Urbina) El maestro Trueba hacía muchos énfasis en que se trataba de un derecho reivindicatorio de los trabajadores, si bien también protegía a los débiles.

Leon Duguit, junto con Gurvitch y Radbruch, a quienes ya nos referimos, tiene un lugar aparte en la concepción social del derecho. Sus reflexiones cooperan con eficacia en la evolución socializante del derecho. Atacó el individualismo en el terreno de la ciencia del derecho. Muy plausible es su concepción del Estado, en la función que debe desempeñar en la vida colectiva, despojándolo de un arbitrio avasallador y dándole el carácter de servidor para organizar la cosa pública y no de amo. La función social del derecho es la realización de la solidaridad social. Esta vez, expresó, un hecho real y no un mero postulado.¹⁶

En las limitaciones de este ensayo, nos hemos propuesto presentar por lo menos un muestreo de las diversas concepciones del derecho social; agotarlas sería motivo de un verdadero tratado y esto sobrepasa los propósitos de este estudio esquemático.

El derecho social hay que entenderlo como opuesto a derecho individual. Otto Gierke (1841-1921) en su teoría sociológico jurídica ya se refería a esta dicotomía o contraposición entre lo individual y lo social. Sin embargo, él propone esta distinción en un sentido que ahora resulta restringido, ya que está referido —lo de social— al antiguo derecho corporativo alemán. Los resultados que obtiene fueron muy valiosos en cuanto a origen del Estado y las interrelaciones de individuo, comunidad y Estado. Este autor defiende la corporación contra las otras dos tendencias de su época, que eran la omnipotencia del Estado, representado por el Estado absoluto y por otra parte el individualismo, que procedía de la ilustración y se hizo efectivo en la so-

¹⁴ RECASENS SICHES, LUIS; *Introducción al Estudio del Derecho*, cuarta edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1977, pág. 360.

¹⁵ TRUEBA URBINA, ALBERTO; *Nuevo Derecho del Trabajo*, Editorial Porrúa, S. A., 1a. edición México, 1970, pág. 155.

¹⁶ DUGUIT, LEÓN. “Un desarrollo más amplio de su pensamiento en mi ensayo sobre La Evolución Socializante del Derecho”, *Revista Mexicana del Trabajo*, No. 2, tomo XIV, 6a. época, abril-mayo-junio, 1967, págs. 66-67. Sus obras: *L'Etat, le Droit Objectif et la Loi Positive*. 1911 pág. 87; *Objective Law*, Columbia Law Review, vol. 20, 1920, pág. 830.

ciudad burguesa del siglo XIX. Gierke¹⁷ expresaba que de acuerdo con la doble naturaleza del hombre, que es un todo para sí y parte de una totalidad más alta, el derecho se escinde en dos ramas a las que denomina derecho individual y derecho social. El primero es el que regula la actividad de las personas físicas y el segundo el que regula a los entes colectivos, a las corporaciones.

Este dualismo — derechos individual y social — se opone en el mismo sentido que se oponen los derechos público y privado; los derechos positivo y natural; los derechos subjetivo y objetivo; los derechos absolutos y los relativos, etc., dicotomías éstas que son muy comunes en nuestra materia, el derecho.

El derecho individual ha sido apoyo de las tesis individualistas y liberales, que parten del supuesto falso de que a los individuos se les encuentra aislados o que su conducta se debe regir en lo personal, protegiendo de manera fundamental los intereses particulares, relegando a segundo término los intereses generales que resultan de la convivencia e interdependencia humanas y que parten del supuesto, también falso, de que los hombres son iguales en sus relaciones sociales.

Según decíamos antes, resulta más acertado hablar de normas de derecho social, debido a que todo derecho es por esencia social. José Castán Tobeñas y Julien Bonnecase indican que es una redundancia y un pleonismo hablar de derecho social. Es necesario entender y aceptar que se denomina así a una clase especial de normas jurídicas que se proyectan a regir, no la conducta individual, sino la social o grupal.

En rigor no es una forma estilística del derecho — como lo indicó Radbruch — ni una simple subdivisión del mismo. Las normas de derecho social están orientadas por una tendencia en la que el individuo es visto como realmente vive y se desarrolla: en grupos, en sectores a los que pertenece de manera permanente (como ser hombre o mujer) o temporal (como ser niño o bien estudiante); pero siempre en una relación dialéctica de interdependencia y de solidaridad con los demás individuos que le rodean.

Eso que se ha observado en el sentido de que todo derecho es social, acontece igual con los derechos público y privado. En rigor todo derecho es público, por ello resulta más acertado hablar de normas de derecho público y normas de derecho privado, para subrayar la presencia o participación de los órganos públicos o estatales o bien la ausencia de ellos, cuando de manera inmediata están sólo de por medio los intereses particulares. Por eso se dice, por ejemplo, que las

¹⁷ OTTO GIERKE, citado por Eduardo GARCÍA MAYNEZ en *Filosofía del Derecho*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1974, págs. 153-155.

normas procesales son siempre de derecho público y las normas civiles de derecho privado, porque en las primeras se protege de inmediato el interés público y en las segundas predomina la actividad particular.

Detrás de la clasificación del derecho en público, privado, social e individual, están siempre presentes implicaciones de carácter político e ideológico.

De la observación del objeto que estudiamos resulta que son normas de derecho social aquellas que propician, mediante sus dictados, el equilibrio entre los integrantes de un mismo grupo y también entre los hombres de los diversos grupos que conforman la sociedad. Gierke¹⁸ indicó: . . . “el derecho social tiene la misión de determinar normativamente la estructura del todo atendiendo a sus partes y a la unidad de éstas”.

En la nueva concepción del derecho social, las normas son estatuidas tomando como base y fundamento antropológico, que todos los hombres tienen una esencia única, porque participan de una misma naturaleza y de las mismas necesidades fundamentales y todos ellos forman el gran grupo denominado humanidad, pero se está reconociendo que en sus relaciones sociales, todos los hombres son diferentes y desiguales. La primera gran diversidad es entre hombres y mujeres; cada sector con sus características específicas, pero dentro de ambas fracciones hay que considerar a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres, inteligentes, subdesarrollados, los profesionales, los técnicos, los pordioseros, los delincuentes, los artistas, los gobernados y los gobernantes, etc. en fin, a los individuos en sus más variadas fases de actuación, en sus distintos roles sociales.

Las normas de derecho social tratan de hacer menos pronunciadas las desigualdades, prescribiendo mayor protección estatal para quienes más la necesiten, señalando las pautas y condiciones que mantengan el mejor equilibrio social, en todas las manifestaciones humanas.

Las normas a que nos referimos no parten de una supuesta igualdad entre los individuos, que no existe, sino que la propician. Todos los hombres, de todos los grupos y sectores, proporción guardada de su debilidad o de su fuerza, son regulados por el llamado derecho social, pero en función del bienestar colectivo, de la justicia social — que le es propia — en sus dos fases: la conmutativa, que rige entre los que son iguales en cierto respecto, esto es, entre los integrantes de un mismo grupo o sector social; y la justicia distributiva, que rige entre los des-

¹⁸ GIERKE, citado por GARCIA MAYNEZ en *op. cit.*, pág. 154.

iguales o sea la que relaciona a los diversos grupos y sectores de la colectividad, comparándolos y nivelando en lo posible sus diferencias.

Considero que es necesario condescender con la denominación de "derecho social", porque tiene ya una larga trayectoria y evolución. Es necesario investigar y descubrir su contenido y no sólo, en su sentido semántico o bien gramatical, analizar las palabras con las que se le denomina.

Es evidente que la idea del derecho social ha variado. La historia registra su evolución cambiante, por ello las definiciones que se propusieron en el pasado, ya no corresponden a la nueva realidad. Con Gierke se entendió que era el que se atribuía a las corporaciones, a los entes colectivos, en contraposición al derecho individual que se dirigía a regular la conducta de las personas físicas. Después por mucho tiempo y por la única razón de haber surgido muy cerca de él, se le ha considerado como sinónimo de derecho del trabajo y también de la seguridad social. Quienes así lo consideraron, ya quedaron atrás. Pero también ya se rezagaron los juristas y sociólogos juristas que observaron en él al derecho tutelar de los débiles o de los indigentes. Ya consignamos aquí algunas de esas nociones. Quienes así lo definieron gran razón tuvieron para ello, porque si fue el derecho para la protección de los pobres. Pero ahora, es necesario dar el paso adelante y con mayor visión de futuro. El derecho social definitivamente es más que eso. Es fácil corroborar que después de haber incluido entre sus disciplinas al derecho laboral, ahora incluye otras ramas jurídicas de proyección social, como el derecho cooperativo, desde luego el agrario, el económico, el de la seguridad social, el de la familia, el de los consumidores y el derecho inquilinario, etc. por sólo citar los principales y de este modo se ha convertido en algo distinto. Es fácil prever, siguiendo esta evolución socializante, que se irán agregando el derecho constitucional, el penal, el administrativo, el fiscal, etc., hasta que en una visión futurista, se integren todas las ramas.

Es notorio que, por lo menos en países como México, las normas de derecho social han venido evolucionando para abarcar, en su regulación, a más sectores de la sociedad y se está convirtiendo en lo que podríamos llamar un derecho social integral o sea un sistema de normas jurídicas que tratan de regular, como es lo normal, la totalidad de la vida social y no sólo la de los trabajadores, la de los débiles o la de los otros sujetos de las ramas que se le han incorporado.

En México recibió gran impulso la tendencia socializante de su sistema jurídico, a partir de nuestras dos grandes revoluciones, la de independencia de 1810 y la revolución mexicana de 1910 en las que a base

de sangre fue necesario sacudir las estructuras sociales, que sólo favorecían a un pequeño sector de la población y mantenían en la miseria y la marginación al resto.

Radbruch vislumbró y así lo expresó, a pesar del escaso desarrollo del derecho social en su época, que no era solamente un derecho destinado a las clases menesterosas, sino que tenía un alcance mucho mayor.

Como antes lo expresé y ahora lo reitero, la tendencia que orienta estas normas que nos ocupan, va dirigida a regular de manera igual a los iguales en cierto respecto o en alguna determinada etapa de la vida humana, y a regir de manera distinta a los individuos que resultan ser diferentes en las relaciones sociales: el hombre frente a la mujer; el rico frente al pobre; el ignorante frente al instruido; el trabajador frente al patrón; el arrendador frente al arrendatario; el gobernado frente al gobernante, etc.

No es el derecho — en su noción universal — el que realmente es más o menos social; lo más preciso es observar que son los sistemas jurídicos, los muy variados sistemas jurídicos que rigen en todo el mundo, los que se socializan en más o en menos. El sistema jurídico socializado no admite privilegios de raza, de religión, de sangre, de poder económico o de fuerza. Reparte y comparte todas las responsabilidades sociales en proporción a la fuerza, al alcance y posibilidades de cada uno de los sectores de la sociedad.

Este es el grado de evolución al que ha llegado la tendencia socializante o socializadora¹⁹ que mediante normas jurídicas incrustadas en el sistema, pretenden, no dar a todos las mismas oportunidades, sino la mayor protección para quien más lo requiere, lo mismo por su condición física, espiritual, económica, educativa, que política, etc. Por eso se ha dicho — con razón — que el derecho social tiene una gran proyección popular y que es realmente revolucionario y será — no cabe duda — el auténtico derecho del porvenir.

Es revolucionario porque rompe con el pasado; se aparta de los postulados individualistas y estatistas, para regir las conductas individuales, pero a través de los muy diversos grupos que integran la sociedad.

Hasta el punto que han llegado nuestras investigaciones, pensamos que para entender el derecho social o lo que hemos denominado la tendencia socializante del derecho, ha sido necesario contar con un

¹⁹ En relación a esta tendencia y para una mejor comprensión de la misma, véase mi ensayo "La Evolución Socializante del Derecho", en la *Revista Mexicana del Trabajo* mencionada.

fuerte apoyo sociológico y después también histórico, para dar por probados sus postulados. Si la sociología estudia y analiza los fenómenos y acontecimientos sociales, el jurista que tiene contacto con la regulación de la conducta, también social, no puede pasar por alto las investigaciones y resultados obtenidos por el sociólogo. La sociología tiene la encomienda de estudiar como viven y conviven los individuos, los grupos humanos y los órganos de poder representativos del Estado. Todos ellos actúan en constantes interrelaciones, de manera absolutamente dinámica. ¿Cuál es el lugar que cada uno ocupa, o mejor expresado debe ocupar en el contexto social? Creo que esta pregunta y su respuesta son una clave valiosa para descubrir lo que de sui géneris tiene el derecho social. La tendencia socializante reconoce la existencia y realidad de los tres elementos mencionados, pero se pronuncia en favor de los grupos, de todos ellos, para atender, pero a través de ellos, las demandas individuales; y los órganos de poder o gobierno, representativos de la organización estatal, tienen una participación muy activa, limitada por el respeto de la dignidad humana, la libertad y la democracia.

Para la plena eficacia de las normas de derecho social es absolutamente necesaria, no la simple existencia de la organización estatal con sus órganos de gobierno, como sujetos pasivos, sino desarrollando una activa labor para coordinar y armonizar todas las fuerzas sociales.

En los derechos y garantías individuales, representativos de la sociedad individualista y liberal, el Estado —entiéndase sus órganos representativos— es un observador o como se ha dicho, un gendarme, que frente a tales derechos, basta con que no interfiera la acción y ejercicio de los individuos. En el colectivismo — como en los regímenes socialistas y comunistas— el Estado es un mal necesario, un elemento indispensable para alcanzar ciertas metas políticas, pero que una vez logradas puede desaparecer. En lo que hemos denominado estatismo, el Estado lo es todo; el individuo nace, vive y muere para satisfacer los fines del propio Estado, su libertad y dignidad se diluyen frente al poder. En la tendencia socializante que nos ocupa, el Estado es primer actor y absolutamente insustituible, pero totalmente desprovisto de todo despotismo o absolutismo; es un instrumento para organizar la vida pública y velar porque se logren y actualicen los fines y valores humanos; es un intermediario, un servidor poderoso, pero no un amo; es también un promotor y su poder sirve para equilibrar las fuerzas de la colectividad y más aún, para patrocinar a quienes por sí mismos no cuentan con los elementos indispensables para vivir, en plena solidaridad con sus congéneres.

En los derechos y garantías sociales, el Estado —sus órganos representativos— se substituye a los propios individuos, para preservar el interés general y repartir y compartir las responsabilidades sociales. Cada día es más necesario que los órganos gubernamentales del Estado, medien entre los diversos grupos, especialmente cuando en algún respecto son antagónicos, como cuando se oponen empresarios a trabajadores; terratenientes a campesinos; arrendatarios de viviendas a arrendadores; proveedores a consumidores, etc. En esta nueva concepción que nos ocupa, se requiere que el Estado sea instrumento de ayuda y colaboración y no de dominación, dentro del más absoluto respeto de la libertad y la dignidad. Se requiere —como lo expresó el maestro Recaséns Siches— una actividad positiva del Estado. . . para suministrar al hombre ciertos bienes y servicios o condiciones.²⁰

Con relación a la afirmación anterior, en el sentido de que los órganos de poder son necesarios como instrumentos de promoción, colaboración, patrocinio y ayuda, para mediar entre todos los grupos, sin dejar que las cuestiones públicas se resuelvan al arbitrio de los particulares o sólo de ciertos grupos, por aquello de la gran desigualdad y desde luego en una plena y auténtica democracia, pensamos en la institucionalización de unos derechos, a los que convencionalmente denominamos de solidaridad social, en los que aspectos de gran proyección social, como la salud, la educación, el trabajo, el descanso, el ejercicio del sufragio, etc., no se pueden dejar al libre juego de las fuerzas sociales o al capricho del tirano, ante la necesidad que tenemos de colaborar los unos con los otros, en plena armonía; normas que deben imponerse por simples razones de solidaridad, en la cual encuentran su justificación y valor.

De acuerdo con la idea antes expresada, nadie debiera decidir por sí mismo si quiere tener o no buena salud; esto nos afecta a todos los miembros de la comunidad. Nadie debiera dejar de trabajar, pero tampoco de descansar después del trabajo, porque ambos aspectos —trabajo y descanso— tienen repercusiones en la economía y en lo que a todos atañe. Nadie debiera dejar de educarse e instruirse, también por sus efectos colectivos en la cultura. El sufragio debiera expresarse siempre, aboliendo el abstencionismo —que es antisocial— porque designar a nuestros gobernantes, que han de administrar la cosa pública, es también algo que a todos nos concierne y no debiéramos permitir que pequeños grupos minoritarios impongan las reglas, para regir los destinos de toda la colectividad. Al lector que le interese el

²⁰ RECASENS SICHES LUIS: *Tratado General de Filosofía del Derecho*. 5a. edición, editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1979, pág. 600.

desarrollo de esta idea socializante, le sugiero leer mi ensayo sobre el tema, publicado en la Revista de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México²¹ en el que se proponen estos derechos de solidaridad social, en los que siempre existe una doble relación jurídica interpersonal, en la que los órganos representativos del Estado son sujetos de derecho, pero también de deber y los individuos gobernados igualmente son sujetos de derecho y sujetos de deber, de manera recíproca: derecho al trabajo, pero también deber de trabajar. . . derecho a la salud, pero también deber de ser saludable. . . derecho al descanso para recuperar fuerzas, pero también deber de descansar en ciertas condiciones. . . derecho a votar, pero con el deber de ejercitar el sufragio. . . derecho a la educación, pero también con el deber de reflejar los resultados en la comunidad, etc.

Como resultado de este estudio podemos concluir que las normas de derecho social:

1) Participan de la naturaleza de toda norma jurídica, en cuanto a que pretenden regular conducta humana de manera general e inexorable, bilateral, externa y coercible.

2) Como todas las normas de su especie, se dan "en" sociedad, pero además "para" la sociedad integrada por muy diversos grupos.

3) Sus destinatarios son los diversos grupos que conforman la sociedad — integrada por hombres dignos y libres — o expresado de otro modo, el destinatario es el hombre, pero en su dimensión social y no los individuos (como en las normas de derecho privado) ni los órganos de poder del Estado (como en las normas de derecho público).

4) Han estado sujetas a una evolución en la que cada vez ganan más terreno, en el ámbito de las disciplinas jurídicas especiales o ramas del derecho.

5) En ellas es determinante el papel que desempeña el Estado actuando como un sujeto activo, para promover la integración de los individuos en grupos, con el fin de coordinarlos y repartir las responsabilidades sociales entre todos los grupos o sectores, sin primacía alguna, sin reconocer privilegios de raza, color religión, posición económica, linaje, etc.

6) Consideran a los individuos integrantes de los grupos, como originaria y esencialmente iguales, como miembros de la humanidad, pero absolutamente desiguales en sus relaciones sociales.

7) Estatuyen trato igual para los iguales o semejantes de un mismo

²¹ Números 166-167-168, tomo XXXIX, julio-diciembre 1989, con el título de "Derechos de Solidaridad Social".

grupo o sector y trato desigual para los desiguales, cuando se oponen sus fuerzas, posibilidades e intereses.

8) Al mismo tiempo tratan de lograr, como valores: la justicia conmutativa entre los integrantes de un mismo grupo, que en cierto respecto resultan semejantes; y la justicia distributiva entre los diversos grupos de la colectividad, relacionándolos, comparando sus posibilidades y nivelando sus diferencias.

9) Son revolucionarias, porque han venido cambiando la estructura social y la mentalidad colectiva, de manera que los individuos, en lo particular, no deciden sobre las cuestiones generales que atañen a todos. Deciden los individuos, pero en grupos y en función del interés general. Son revolucionarias, en otro sentido, porque han sido producto de revoluciones armadas en las que se ha escuchado el grito de las grandes masas de hombres, cuando las injusticias han llegado a su máxima expresión.

10) Están llamadas a constituir el derecho del porvenir — los sistemas jurídicos del futuro — cuando integralmente estén presentes en todas las ramas o disciplinas jurídicas; cuando se logre acuerdo en el sentido de que, en su función social, todos los grupos y sectores que forman los individuos, son engranajes de una gran maquinaria (la sociedad); cuando se acepte finalmente que nos necesitamos los unos a los otros, si hemos de vivir juntos y en plena solidaridad para lograr lo que todos deseamos: la justicia, la paz y la seguridad social, en un mundo en el que se nos considere sencillamente como lo que somos: seres humanos.

Con tales antecedentes y conclusiones, proponemos que a las normas de DERECHO SOCIAL se les defina así:

Son aquellas cuyos destinatarios son los diversos grupos y sectores que integran la sociedad, sin considerar primacía en ninguno de ellos, para atribuir derechos y obligaciones a los individuos, pero siempre participando del todo a través de su grupo temporal o permanente, anteponiendo el interés general al particular; cuyas normas son impuestas por órganos de poder institucionalizado, representativos del Estado, que actúan como equilibradores de todas las fuerzas y como intermediarios, promotores, procuradores y defensores de quienes más lo requieran frente a grupos opuestos; vigilando asimismo el más adecuado reparto de las responsabilidades sociales; aplicando las dos justicias, la conmutativa entre los iguales en cierto respecto y la distributiva entre los desiguales.

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ DEL CASTILLO, Enrique. *El Derecho Social y los Derechos Sociales Mexicanos*, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, D. F., 1982.
- CASTAN TOBENAS, José. *El Derecho Social*, Madrid, 1944.
- CATHREIN, Víctor. *Filosofía del Derecho*, Instituto Editorial Reus, S. A., 7a. edición, Madrid, 1958.
- CESARINO, Jr. *Derecho Social Brasileiro*, Sao Paulo, Brasil, 1943.
- DONATI, Benvenuto. *¿Qué es la justicia social?*, trad. de Salvador Laborde, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tomo X, núms. 39-40, jul.-dic. 1948.
- DUGUIT, León. *Manual de Derecho Constitucional*, 2a. edición, Madrid, 1926.
L'Etat, le Droit Objectif et la Loi Positive, 1911.
Objective Law, Columbia Law Review, vol. 20, 1920.
- FIX ZAMUDIO, Héctor. *Introducción al Derecho Procesal Social*, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid, 1965.
- GARCIA MAYNEZ, Eduardo. *Filosofía del Derecho*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1a. edición, 1974.
- GARCIA RAMIREZ, Sergio. *El Derecho Social*, *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, tomo XV.
"Lo Social en los Sistemas Jurídicos Constitucional e Internacional Contemporáneos", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, UNAM, México, año 1, núm. 1, enero-abril, 1968.
- GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. *El Derecho Social y la Seguridad Social Integral*, Textos Universitarios, UNAM, México, 1978.
Proyecciones y Ensayos Sociopolíticos de México, Ediciones Botas, México, 1963.
- GURVITCH, Georges. *Elementos de Sociología Jurídica*, ed. José María Gajica, Puebla, Pue., México, 1948.
L'Idée du droit social, Sirey, París, 1932.
La Declaration des droits sociaux, París, Librairie Philosophique, J. Vrin.
Las formas de la sociabilidad, Editorial Losada, S. A., Biblioteca Sociológica, Buenos Aires, Argentina.
- IHERING, Rudolf von. *El Fin en el Derecho*, Editorial Cajica, tomos I y II, Puebla, Pue., México, 1961.
- JASPERS, Karl. *La Filosofía*, Brevarios del Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1979.
- MARTIN GRANIZO, León y Mariano GONZALEZ R. *Derecho Social*, tercera edición, Editorial Reus, S. A.
- MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. *El Derecho Social*, segunda edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1967.
- RADBRUCH, Gustavo. *Introducción a la Filosofía del Derecho*, Fondo de Cultura Económica, México, 1951.
Introducción a la Ciencia del Derecho, Madrid, España, 1930.
- RECASÉNS SICHES, Luis. *La Filosofía del Derecho en México durante el siglo XX*; publicado en: LXXV Años de Evolución Jurídica en el Mundo, vol. IV, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1979.
Tratado General de Filosofía del Derecho, 5a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1979.
Introducción al Estudio del Derecho, cuarta edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1977.

- ROJAS ROLDAN, Abelardo. *La Evolución Socializante del Derecho*, Revista Mexicana del Trabajo, núm. 2, tomo XIV, 6a. época, abril-mayo-junio, 1967, págs. 51-84.
"Derechos de Solidaridad Social". *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, números 166-167-168, tomo XXXIX, julio-diciembre, 1989.
La Tetradimensionalidad de las normas jurídicas, la Definición del Derecho y otras Implicaciones; Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (I.V.R.), vol. X, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1984, págs. 245-250.
"Sistemas de Interpretación del Derecho; El Arte de la Interpretación Jurídica", *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, núms. 105-106, enero-junio, 1977, págs. 325-339.
- SERRA ROJAS, Andrés. *Ciencias Políticas*, tomo II, Instituto Mexicano de Cultura, México, 1971.
- STAFFORINI, Eduardo R. "Panorama Actual del Derecho Social en Argentina", *Revista de la Facultad de Derecho*, UNAM, tomo XV, núm. 58, abril-junio, 1965.
Derecho Procesal Social, Editorial Tipográfica, Editora Argentina, Buenos Aires, 1955.
- TRUEBA URBINA, Alberto. *Nuevo Derecho del Trabajo*, Editorial Porrúa, S. A., primera edición, México, 1970.